

SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL IPN Y CON LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

A la opinión pública.

A los estudiantes politécnicos.

A los normalistas de Ayotzinapa

Los jóvenes son uno de los sectores de nuestra sociedad, más severamente golpeado por la crisis económica que padece México. Se les ha sometido al desempleo, a la incertidumbre laboral y a la exclusión social y política. Ante la falta de oportunidades muchos de ellos se ven obligados a refugiarse en la economía informal o emigrar a Estados Unidos.

Finalmente, quienes logran matricularse en algún plantel educativo, se enfrentan a una política gubernamental que subordina los procesos educativos a los intereses de negocio de los mercados globalizados. Para ello se favorece a escuelas privadas, se restringe el presupuesto para las instituciones de educación pública y se imponen estándares y modelos pedagógicos afines a los intereses empresariales. De esta manera la educación deja de ser un derecho humano universal y un bien público de carácter social garantizado por el Estado.

Estas son algunas de las razones que explican el surgimiento de movimientos estudiantiles como el del IPN o el de las Normales Rurales. En el primer caso la comunidad politécnica exige la realización de un Congreso Resolutivo que defina el futuro de la Institución mientras que los normalistas se oponen a la eliminación del Sistema de Normales Rurales.

En este contexto, cuando los profesores y alumnos de Ayotzinapa participaban en una protesta, fueron reprimidos con lujo de violencia por fuerzas policiacas del Estado de Guerrero. Posteriormente se produjo un segundo ataque mientras se realizaba una conferencia de prensa. El saldo de ambas agresiones fue de varios heridos, 6 personas asesinadas y la desaparición forzada de 43 estudiantes. Estos hechos han sido condenados por amplios sectores sociales de México y de otros países.

Como consecuencia de la infructuosa búsqueda de los normalistas desaparecidos, se han localizado varias fosas clandestinas y aunque las autoridades aseguran que los cuerpos enterrados en ellas no corresponden a los jóvenes secuestrados, estamos ante hechos que dan cuenta de una condición de violencia generalizada que se asocia con la corrupción, la impunidad, la complicidad, la aplicación discrecional de la justicia y con la descomposición de las instituciones encargadas de la procuración de la justicia, violentando el Estado de Derecho. Estas acciones involucran todos los órdenes de gobierno sin importar la filiación partidista, se presenta en varias entidades del país y demuestra la notoria penetración del crimen organizado en la vida nacional.

Asimismo, denunciaremos la tendencia a recurrir al autoritarismo político por parte del gobierno federal y los gobiernos locales ante los conflictos sociales, las recientes respuestas y conductas frente a la protesta social, la criminalización y judicialización de las luchas sociales, pisoteando las garantías individuales con prácticas como el arraigo, la persecución, las amenazas, el encarcelamiento y las desapariciones forzadas, la violencia física y psicológica y la persecución en contra de diversos grupos, activistas y líderes sociales. Constituyen una violación sistemática de los derechos humanos.

Ante sucesos como estos o como la matanza cometida por integrantes del ejército en Tlatlaya, Estado de México, los trabajadores no podemos permanecer indiferentes. Las organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil condenamos enérgicamente todos estos actos perpetrados por las fuerzas policiacas y militares, toda vez que atentan contra el Estado de Derecho y degradan la vida democrática.

Exigimos un incremento real al presupuesto de la educación para fortalecer a las instituciones de educación, atender las demandas académicas y laborales e impulsar la calidad de la enseñanza y la excelencia académica en todos los niveles educativos. Asimismo demandamos la construcción de vías de solución por medio del diálogo para atender y resolver las demandas de los estudiantes del IPN, las Normales Rurales y la comunidad de Tlatlaya.

La UNT y el FAU exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva que se traduzca en un castigo ejemplar a los autores intelectuales y materiales de la masacre de Iguala y el fusilamiento en Tlatlaya. El Estado mexicano debe adoptar todas las medidas oportunas para evitar que estos hechos de barbarie y autoritarismo, no se vuelvan a repetir.

Convocamos a todos los ciudadanos este próximo martes 28 de octubre a las 17:00 horas a una marcha-mitin del Monumento de la Revolución al Zócalo, en exigencia de una solución satisfactoria a las demandas politécnicas y en solidaridad con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Asimismo se desarrollarán diversas movilizaciones en las principales ciudades del país.

“VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”

**POR LA RESTITUCION DEL ESTADO DE DERECHO, EL RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS, ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA
PROTESTA SOCIAL**

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES

FRENTE AMPLIO UNITARIO